

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Dieciséis (16) de Marzo de Dos mil Veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0158

Captura	11 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Sentencia	16 DE NOVIEMBRE DE 2012
Fallador	JUZGADO 1º PENAL DEL CIRCUITO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA
Delito	HOMICIDIO AGRAVADO Y SECUESTRO SIMPLE
Condena	22 AÑOS DE PRISION – MULTA 400 SMLMV
Apelación	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA SALA PENAL BOGOTA D.C., 11 DE MARZO DE 2013 - CONFIRMA
Reclusión Actual	Prisión Domiciliaria
Procedencia	JUZGADO FALLADOR

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a resolver la solicitud incoada por **JULIO CÉSAR GARCÍA CONTRERAS** respecto a la posibilidad de continuar disfrutando del Beneficio Administrativo de Permiso de hasta de 72 horas que viene gozando y que fue concedido en su oportunidad Actualmente se encuentra cumpliendo pena en prisión domiciliaria.

2. CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

El JUZGADO 1º PENAL DEL CIRCUITO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA en sentencia del 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 CONDENÓ a **JULIO CESAR GARCIA CONTRERAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.428.197 de Madrid Cundinamarca, a la pena privativa de la libertad de 22 AÑOS DE PRISION – MULTA 400 SMLMV , por el punible de HOMICIDIO AGRAVADO Y SECUESTRO SIMPLE. Le negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Apelada el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA el 11 DE MARZO DE 2013 la confirmó.

El señor JULIO CÉSAR GARCÍA CONTRERAS viene cumpliendo pena desde el Captura: i) del 11 al 22 de abril de 2005 y; ii) 11 de septiembre de 2012- Se le han reconocidos redenciones de pena por 35 meses y 4.5 días.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

El homólogo 2º de Guaduas Cundinamarca, mediante auto interlocutorio 4514 del 27 de noviembre de 2020, concedió al condenado el sustituto de prisión domiciliaria – artículo 38 G del C.P., en garantía de sus obligaciones prestó caución mediante póliza judicial No. 17-41-101061142 del 02 de diciembre de 2020 y suscribió diligencia de compromiso el 9 de diciembre de 2020, fijó su domicilio en la **Calle 15 No. 16-15 Bloque 1 Apto 104 Ciudadela Parque Facatativá Cundinamarca. Celular 3125723530**

En auto del 10 de febrero de 2021 este juzgado conoce por **REINGRESO** las presentes diligencias por competencia. Siendo vigilado por las directivas de la **CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.**

En esta oportunidad solicita el beneficio de 72 horas que tenía aprobado cuando se encontraba cumpliendo pena intramuralmente.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020¹ del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios"*.

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

¹ ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Sobre este tópico traemos a colación de la Ley 65 de 1993 lo siguiente:

“ARTÍCULO 104. ACCESO A LA SALUD. <Artículo modificado por el artículo 65 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicas o mentales. Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

En todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria.

Se garantizará el tratamiento médico a la población en condición de discapacidad que observe el derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad específica.”

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 546 de 2020, mediante el cual adoptó *“medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*.

Por lo anterior, es diáfano que las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1 Competencia

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar purgado pena privado de la libertad en prisión domiciliaria en la **Calle 15 No. 16-15 Bloque 1 Apto 104 Ciudadela Parque Facatativá Cundinamarca. Celular**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

3125723530, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007².

4.2 Del Beneficio Administrativo De Permiso Hasta Por Setenta Y Dos Horas Para Domiciliarios

Si bien es cierto, dentro de nuestra legislación sustantiva penal no se encuentra tipificado el caso sub judice, esto es, que luego de modificar la situación jurídica del interno en establecimiento penitenciario y sustituirla por la prisión domiciliaria, este se encuentre igualmente facultado para seguir gozando del beneficio administrativo de permiso de salida hasta por 72 horas previamente aprobado por la autoridad competente, también lo es que sobre la materia se deben analizar algunos aspectos a saber:

La legislación aplicable al caso es la contenida en el Artículo 147 de la Ley 65 de 1993 que en lo tocante al beneficio administrativo de las 72 horas establece:

“ARTÍCULO 147. PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS. La Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar en la fase de mediana seguridad.
2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta.
3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.
4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.
5. Modificado. L. 504/99, Art. 29. Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado.
6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina.

Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su presentación al establecimiento sin justificación, se hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le cancelarán definitivamente los permisos de este género.”³

En gracia de discusión es viable advertir que el permiso de salida de hasta setenta y dos horas es un beneficio administrativo que a la postre tiene su sustento jurídico en el artículo 146 de la Ley 65 de 1993 que textualmente aduce:

“ARTÍCULO 146. BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS. Los permisos hasta de setenta y dos horas, la libertad y franquicia preparatorias, el trabajo extramuros y penitenciaria abierta harán parte del tratamiento penitenciario en sus distintas fases, de acuerdo con la reglamentación respectiva.”

En concordancia con lo que antecede los beneficios administrativos forman parte fundamental del tratamiento penitenciario y son inherentes a la ejecución individual de la condena, pues suponen una disminución de las cargas que deben soportar las personas privadas de la libertad, así pues, cuando la pena se cumple bajo privación de la libertad

² 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y **Guaduas** (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)².

³ Artículo 147, Ley 65 de 1993, “Por la Cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

en un establecimiento penitenciario, el condenado queda sometido a un tratamiento que pretende prepararlo para su resocialización y su vida en libertad.

Al respecto señaló la H.Corte Suprema de Justicia en Rad. 15826 del 03 de septiembre de 2002:

“(…) Estos mecanismos están orientados a obtener gradualmente la rehabilitación y reinserción social del condenado para que al volver al seno de la sociedad no vuelva a delinquir. Así entonces, a medida que vaya superando las distintas fases del tratamiento y concurran en su favor los requisitos previstos en la ley tendrá derecho al reconocimiento de cada uno de ellos, partiendo del permiso hasta de 72 horas para salir del establecimiento sin vigilancia; pasando por la libertad preparatoria para trabajar en fábricas, empresas o con personas de reconocida seriedad en el día, debiendo pernoctar en el establecimiento; hasta llegar a la franquicia preparatoria que consiste en que el condenado trabaje, estudie o enseñe fuera del establecimiento con el compromiso de presentarse periódicamente ante el director del penal.

Ahora, es claro que el reconocimiento de cada uno de ellos implique cambios en las condiciones del proceso de ejecución de la sanción. Así pues, el condenado que se halle en la fase de mediana seguridad y en él converjan los demás presupuestos, tendrá derecho a salir de la cárcel con la regularidad prevista en los reglamentos hasta por 72 horas sin vigilancia; quien habiendo descontado las cuatro quintas partes de la pena y satisfaga los restantes presupuestos legales tendrá derecho a trabajar o estudiar por fuera del establecimiento y regresar a él para pernoctar al finalizar el día, etc. (...)”.

Aterrizando al caso objeto de estudio se observa como el enjuiciado de la referencia ha aprobado cada etapa del tratamiento penitenciario, pues una vez el ente que vigila la pena ventiló el cumplimiento de los requisitos formales para la concesión del beneficio administrativo de 72 horas manifestando que la misma se encontraba en fase de mediana seguridad, el Juez encargado de la ejecución de la pena autorizó dicho beneficio el cual se materializó en su oportunidad por el procesado, luego teniendo en cuenta que JULIO CESAR GARCÍA CONTRERAS cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos en la norma para la sustitución de la prisión en establecimiento penitenciario por prisión domiciliaria, le fue otorgado dicho beneficio, entonces no en vano el legislador ha otorgado a cada fase del tratamiento penitenciario periodos en los que se analiza cada caso en particular y se determina si el individuo se encuentra preparado para avanzar a la siguiente etapa del tratamiento.

Para ahondar en esta situación vemos como el artículo 144 de la Ley 65 de 1993 da a conocer las etapas del tratamiento penitenciario, a saber:

“ARTÍCULO 144. FASES DEL TRATAMIENTO. El sistema del tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases:

1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno.
2. Alta seguridad que comprende el período cerrado.
3. Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.
4. Mínima seguridad o período abierto.
5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional.

Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras fases para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección educativa del INPEC suministrará las pautas para estos programas, teniendo en cuenta que su contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización del interno.

PARÁGRAFO. La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente, según las disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusión.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Entonces, para el presente asunto nótese que el sentenciado una vez se encontró en fase de mediana seguridad fue cobijado por algunos beneficios, entre estos, los permisos de salida hasta por setenta y dos horas, luego al reunir los requisitos legales avanzó a la etapa de mínima seguridad en donde se pudo beneficiar con la prisión domiciliaria, logrando descontar su pena en un ámbito familiar gozando de otras acreencias, tales como permisos excepcionales, permiso para trabajar y/o estudiar entre otros, así las cosas y en concordancia con lo que antecede no sería procedente que el procesado siguiera disfrutando del beneficio administrativo de 72 horas en razón a que este es exclusivo de los internos en establecimiento penitenciario, pues como bien la norma lo indica (artículo 147 ley 65 de 1993) se trata de un permiso para salir del establecimiento y su objetivo primordial es afianzar los vínculos familiares para contribuir en el proceso de resocialización.

De contera, se resalta que el beneficio administrativo de 72 horas tiene como fin específico preparar al interno para su ingreso al régimen abierto (prisión domiciliaria), pues es así como un requisito imprescindible para su concesión es la visita domiciliaria al lugar donde el infractor permanecerá durante el tiempo del disfrute de dicho beneficio, tal como se resalta en la circular 000090 del 29 de septiembre de 2011 emitida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

“7º. Verificación del lugar donde el interno gozará del permiso. La Oficina de Trabajo Social y el Comando de Vigilancia del Establecimiento, deberán constatar el lugar de la residencia donde el Interno gozará del permiso, conceptuarán sobre el entorno, indicando si es recomendable o no para su proceso de reinserción y para ello elaborarán acta de visita suscrita por los moradores del inmueble.”

En el decurso procesal el condenado hoy disfruta la prisión domiciliaria, luego entonces no tendría fundamento jurídico que se autorizara el goce del permiso de 72 horas teniendo en cuenta que este es única y exclusivamente para permanecer en la morada que previamente le fue autorizada, pues no ha establecido la legislación que dicho beneficio sea para acudir a lugares diferentes máxime cuando su asidero principal es fortalecer los lazos familiares, en conclusión si JULIO CÉSAR GARCÍA CONTRERAS fue favorecido con la domiciliaria ¿para que emplearía su permiso de 72 horas?.

Corolario de lo anterior, sin necesidad de ahondar en más consideraciones, el Despacho negará el permiso de salida hasta por 72 horas por encontrarse beneficiado con la prisión domiciliaria.

Así, se NOTIFICARA por secretaria a JULIO CÉSAR GARCÍA CONTRERAS, a fin de notificarlo personalmente de la presente decisión, toda vez que actualmente se encuentra gozando del beneficio de la sustitución de la pena de prisión en centro de reclusión por la prisión domiciliaria en la **Cra. 13 B bis No. 19- 116 Barrio El Diamante, Facatativá (Cundinamarca)** jcgc0821@hotmail.com.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.450 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una Secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio del beneficio de 72 horas.

Por último se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»⁴, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad...”⁵

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado no reúne los requisitos estipulados para la concesión del beneficio de 72 horas, motivo que lo lleva a no acceder la petición invocada.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores

⁴ Ibídem.

⁵ CSJ T 102248

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *“desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”*.⁶

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

Por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020 y que en la actualidad nos encontramos organizando y ubicando los procesos.

Del mismo modo se tiene que mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 que autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“Autorizar el cierre extraordinario y suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive*, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se está presentando en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, *se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.*

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y desde la semana pasada nos encontrábamos en el alistamiento de todos los expedientes para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización los cuales fueron trasladados por la empresa contratada.

Ahora, en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021, inclusive. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021.

⁶ C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

5. DECISIÓN

Por lo expuesto, el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA,

R E S U E L V E

PRIMERO. NEGAR a JULIO CÉSAR GARCÍA CONTRERAS, la concesión del permiso de salida hasta por 72 horas, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO. REMÍTASE copia de la presente decisión a la Dirección **CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C** para que repose en la hoja de vida de JULIO CÉSAR GARCÍA CONTRERAS quien actualmente se encuentra gozando del beneficio de prisión domiciliaria recientemente vigilada por ese penal.

TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente a JULIO CÉSAR GARCÍA CONTRERAS, de la presente decisión, toda vez que actualmente se encuentra gozando del beneficio de la sustitución de la pena de prisión en centro de reclusión por la prisión domiciliaria en la **Cra. 13 B bis No. 19- 116 Barrio El Diamante, Facatativá (Cundinamarca)** jcgc0821@hotmail.com ..

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J J E Z

